

## **SIMETRÍAS Y DIVERGENCIAS EN LA HISTORIA DE ARGENTINA Y CHILE\***

**Claudio Véliz**

Más contrastes y divergencias que paralelos encuentra el autor en la historia de Argentina y Chile. Esto, a pesar del origen y la lengua comunes. Claudio Véliz contrasta, desde luego, el carácter casi continental de Argentina con la insularidad de Chile. Luego desarrolla el tema de la guerra de Arauco y su influjo: constituir en torno al Valle Central una sociedad civil legalista y desmilitarizada; y en la frontera del Sur, una sociedad fuertemente marcada por el liderazgo militar de campaña y soldados reclutados en diversas ciudades de España e Indias.

---

CLAUDIO VÉLIZ. Ph.D. en Historia Económica en The London School of Economics. Enseñó en la Universidad de Chile donde fue el fundador y primer director del Instituto de Estudios Internacionales y de la revista *Estudios Internacionales* de esa universidad. En la actualidad es profesor emérito de sociología de La Trobe University, Australia; tiene la Cátedra Ordinaria de Historia de Boston University, U.S.A., y es director de The University Professors, Boston University, U.S.A. Sus obras más conocidas son *Historia de la marina mercante de Chile* (Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile, 1961); *The Centralist Tradition of Latin America* (Princeton: Princeton University Press, 1980); y, más recientemente, *The New World of the Gothic Fox, Culture and Economy in English and Spanish America* (Berkeley: University of California Press, 1994).

\* Esta es una versión modificada de un trabajo presentado ante el Seminario internacional sobre *Argentina y Chile: ¿Desarrollos paralelos?*, realizado en Buenos Aires entre el 28 y el 31 de agosto de 1996, bajo el auspicio del Instituto del Servicio Exterior de la Nación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.

Es difícil comparar Argentina y Chile sin percatarse del carácter respectivamente continental e insular de las dos naciones. En el caso de Argentina, la primera impresión, reforzada con cada visita a su amplia circunstancia, es la de una versión harto plausible de lo que se quiere decir cuando se usa el término “subcontinente”. Esto no debiera requerir justificación, pero si ésta fuese necesaria, se podría observar que el territorio argentino continental excede, y con mucho, al de todos los países europeos salvo Rusia, y que los mismos mil setecientos kilómetros que separan a Jujuy de la Capital Federal bastan para cruzar Europa Occidental desde Londres hasta Viena.

La influencia de esta vasta y próspera geografía interior cuya latitud y longitud se encuentran casi siempre a espaldas de Buenos Aires, puede ser tan significativa como desconcertante. Una comparación apresurada con Chile podría, por ejemplo, llevar a concluir que la amplitud del subcontinente argentino asegura la dispersión y atenuación de las voces del interior de tal modo que rara vez se escuchan sobre el bullicio del gran puerto capitalino, mientras que la apretada ínsula chilena parecería garantizar una importante y casi directa injerencia regional en la conducción de los asuntos nacionales. El que estas dos apreciaciones estén tan obviamente distantes de lo que en realidad ocurrió en el pasado se debe, por lo menos en parte, a la paradójica relación que ambas sociedades tienen con su propia geografía.

En el caso de Chile, lo que impresiona de inmediato es su insularidad respecto del continente americano, quizás tan decidora como la del Japón respecto de Asia, y la de Gran Bretaña respecto del continente europeo. Bastaron las treinta y dos millas del Canal de la Mancha, invasiones exitosas no obstante, para separar la historia de los ingleses de aquella de brabantinos, flamencos, daneses, bretones y normandos, y no es excesivo proponer que igual éxito han tenido la cordillera andina, superada en magnitud sólo por los montes Himalaya, y el desierto atacameño, galardonado como el más absoluto e inhóspito del globo, para hacer de Chile una isla frente a la costa suroccidental del continente americano<sup>1</sup>. Los orígenes y eventual desarrollo de la sociedad chilena no pueden ser adecuadamente comprendidos si no se otorga peso a esta singularísima insularidad que de modo tan decisivo ha ayudado a modificar y robustecer el enfático centralismo heredado de la España progenitora.

---

<sup>1</sup> Sin olvidar, por supuesto, que la única y muy auspiciosa invasión a través de los Andes la efectuó un ejército libertador que era, por lo menos, tan argentino como chileno.

Argentina, por otra parte, quizás con menos éxito de lo anticipado, ha protagonizado uno de los intentos más convincentes por alejarse de la tradición centralista característica de las repúblicas hispanoamericanas<sup>2</sup>. Desde luego, no es el único estado federal del mundo de habla hispana, pero podría argüirse que es uno de los más plausibles y, desde nuestro punto de vista, el más interesante, puesto que su situación al oriente del macizo andino establece de manera insoslayable una sugerente polaridad entre la más continental y la más insular de las repúblicas iberoamericanas. Dicho de otro modo, y haciendo las salvedades que el ejemplo requiere, Argentina es a Chile como Francia es a Gran Bretaña, o China es a Japón.

No debe extrañar que el contraste entre estas disposiciones centralistas y federalistas sea eminentemente compatible con los usos lingüísticos característicos de los dos países. Pertenecemos a un momento histórico que asigna importancia primordial a la lengua, tanto por su innegable función cultural, como por su calidad de metáfora definitiva de la sociedad contemporánea. Antes de nuestra época, las comparaciones más socorridas hacían de la sociedad algo como un árbol, un río, un mecanismo, o un organismo, pero por lo menos desde Vico y Saussure, pensamos que la sociedad no es *como* la lengua, sino que *es* la lengua, y lo menos que se puede observar al acercarse al tema desde este punto de vista, es que la disposición centralista de los chilenos se ve bien reflejada en la característica ausencia de acentos regionales. Este fenómeno, que tarde o temprano será descrito por algún sociólogo como una homogeneidad lingüística horizontal, está generosamente compensado en la dimensión vertical con una multiplicidad de usos, acentos y entonaciones que identifican procedencia social con precisiones que dan origen a un rico, aun cuando ocasionalmente cruel y despectivo, vocabulario clasificatorio.

En Argentina, la disposición contrastante encuentra un eco decidor en la legendaria diversidad de sus acentos regionales. Aquí viene al caso un chiste que sólo puede ser contado por un buen imitador de acentos locales, que va algo así como “Los eentrerrianos cantan; los poorteños cantan; los rioojanos cantan; los úunicos que natural hablamos soomos los coordobebes”. Si se necesitara evidencia adicional para ilustrar la diversidad cultural que adorna a la nación argentina, bastaría con mencionar el tango y el lunfardo, y hacer notar que la vigorosa cultura urbana de Buenos Aires no

---

<sup>2</sup> Brasil está intencionalmente excluido puesto que se podría argumentar que tanto sus antecedentes coloniales, especialmente en las capitanías, como el eventual establecimiento de un régimen federal en el siglo XIX, sentaron las bases de una ordenación marginalmente más descentralizada que la de la Argentina.

sólo es excepcional en América Latina, sino que es también absolutamente inconfundible con aquella de Salta, Santa Fe, Córdoba o Mendoza.

Apenas si vale la pena agregar que nada de esto es aplicable a Chile, donde la ausencia de diferencias discernibles en los acentos de coquimbanos, osorninos, porteños y santiaguinos tiene antecedentes venerables que se remontan cuatro siglos, a los orígenes de la nación, cuando el erudito jesuita Luis de Valdivia compuso la primera gramática y diccionario mapuche, en el que otorgó señalada importancia al hecho que esta lengua era usada por todos los naturales, desde la ciudad de Coquimbo hasta la isla de Chiloé<sup>3</sup>. Esta clara afirmación fue ratificada dos siglos más tarde por otro estudioso jesuita, el abate Ignacio Molina, quien se expresó asombrado al constatar que el mapuche, o araucano, no había generado dialectos locales a pesar de ser la lengua de los naturales de una región tan extensa como variada.

Atenerse exclusivamente a ejemplos comparativos como éstos, de ínsula y continente, centralismo y regionalismo, arriesga simplificar la situación excesivamente pues sugiere una abundancia mayúscula de contrastes simétricos, cuando en realidad éstos son excepcionales. Más usual es encontrar características o procesos sólidamente enraizados a uno u otro lado de los Andes, sin mayor influencia ni contrapartida en el país vecino, como lo demuestra claramente, por ejemplo, la experiencia bonaerense con las invasiones británicas a comienzos del siglo XIX. Sin embargo, también es cierto que una enumeración austera de tales eventos o procesos correría el riesgo aún mayor de terminar siendo un catálogo tremendamente inútil de acontecimientos inconexos.

Me parece más conveniente proponer una reconsideración de dos instancias históricas, una probablemente menos conocida y que requiere más explicación que la otra, que, en mi opinión, apartaron definitivamente a la ínsula chilena de los procesos formativos del gran ámbito continental americano. La primera de estas, y la menos conocida, fue la formación *sui generis* de sociedades paralelas que prosperaron o sobrevivieron respectivamente en el vecindario capitalino y en la frontera de Arauco; la segunda, la abundantemente comentada pero no por esto menos importante consolidación de los regímenes civiles de la república durante la primera mitad del siglo diecinueve. En ninguno de estos dos casos es apropiado siquiera intentar establecer comparaciones simétricas puesto que la experiencia chi-

---

<sup>3</sup> Luis de Valdivia, *Arte, vocabulario y confesionario de la lengua de Chile*, edición facsimilar de Julio Platzman (Leipzig, 1887, Prefacio). La primera edición está fechada en Lima, en 1606.

lena es indudablemente excepcional, no por ser mejor o peor, sino porque en Argentina y en el resto del continente americano no se dieron situaciones paralelas ni en los antecedentes históricos, ni en las circunstancias inmediatas, y menos aún en sus consecuencias.

El primero de estos casos está relacionado íntimamente con la sanguinaria y excepcionalísima guerra de Arauco, que aun cuando intermitente hizo méritos más que suficientes para ganarse el sobrenombre de “Flandes indiano” que le otorgaron los peninsulares que en ella lucharon. Aparte de ser ésta la más larga guerra en la historia del Nuevo Mundo, fue asimismo excepcional puesto que ningún otro pueblo indígena americano opuso una resistencia siquiera remotamente comparable con la de los araucanos. Los chichimecas mexicanos así como más adelante los calchaquies del norte argentino causaron cierta alarma durante unos pocos años, pero la rápida consolidación de la conquista al través de las Indias fue posible precisamente por el sometimiento casi sin lucha de los otros pueblos americanos. Esto significó que, aparte de la contienda en la Araucanía, durante los dos siglos que siguieron a la conquista las necesidades militares del imperio español en las Indias se redujeron a la defensa de algunos puertos contra las depredaciones de piratas ingleses, franceses y holandeses.

Las primeras hostilidades de la guerra de Arauco datan de 1536, cinco años antes de la fundación de Santiago en la cabecera del Valle Central, y las últimas de 1883, tres y medio siglos más tarde. Durante este largo período, con la excepción de los primeros choques en las cercanías de la capital que en poco tiempo llevaron a la pacificación del Valle Central, el “Flandes indiano” estuvo rigurosamente localizado en la frontera de guerra del Bío-Bío al sur. Esto exigió que cada primavera durante toda la segunda mitad del siglo XVI, los encomenderos y otros residentes españoles del Valle Central en estado de cargar armas tuvieran que cabalgar, con disgusto creciente, los quinientos kilómetros que los separaban de la Araucanía, y pasar el verano lejos de sus familias luchando en una guerra que veían cada vez más distante de sus verdaderos intereses y que se alargaba sin esperanzas de una resolución pronta y favorable. Por el contrario, los reveses y vicisitudes del conflicto demandaban que los hijos, nietos y bisnietos de los conquistadores españoles que residían en un Valle Central que por medio siglo había sido próspero y tranquilo, continuaran arriesgando la vida en Arauco. La resistencia a estas demandas, aunada al convencimiento de los vecinos de Santiago de que ya habían pagado sus obligaciones militares y que exigirles más constituía un abuso intolerable, engendraron diversos arbitrios y artimañas para evitar la cabalgata al sur que, por razones obvias, tendían a estar más al alcance de las familias influyentes. Se produjo así una

reveladora correlación entre el grado de poder, dinero y prestigio de una familia, y la proporción de sus miembros en edad de cargar armas que cada primavera se veían obligados a acudir a la guerra. A medida que pasaban los años, sólo quienes carecían de influencia marchaban al sur, y las recriminaciones, abusos y delaciones inevitables en tales circunstancias empezaron a abrir un abismo de suspicacias e incomprensiones entre la sociedad civil del Valle Central y la sociedad militar de la frontera de guerra, que contribuyó en forma importante a darle un cariz negativo a la obligación, inicialmente percibida como legítima y razonable, de acudir con armas y cabalgaduras a la defensa del patrimonio real.

Es así como durante las últimas décadas del siglo llovieron memoriales sobre Felipe II y sus consejeros, solicitando la creación de un ejército pagado para luchar contra los araucanos y de este modo eximir permanentemente de obligaciones militares tanto a los españoles como a los indios de paz avecindados en la cabecera del Valle Central, permitiéndoles retornar al seno de sus familias y, muy importante, a las faenas agrícolas cuyos productos ya habían empezado a abastecer regularmente al virreynato del Perú.

Estos memoriales, cada vez más angustiosos, no hicieron mayor impresión en la corte española hasta que en diciembre de 1598, en Curalaba, sobre las márgenes del río Lumaco, guerreros araucanos al mando del legendario toqui Pelantaro aniquilaron a un destacamento armado de cincuenta españoles y trescientos indios auxiliares que acompañaban al gobernador Martín García Óñez de Loyola, un noble vasco emparentado con san Ignacio de Loyola y el virrey Francisco de Toledo, que tuvo el melancólico honor de ser el segundo gobernador de Chile en perecer a manos de los araucanos. El desastre de Curalaba marcó el estallido de la gran rebelión de fines de siglo que arrasó siete de las doce ciudades levantadas durante sesenta años de esfuerzos pioneros. En su retirada hacia el norte, los acosados españoles abandonaron territorios más extensos que Bélgica y Holanda juntas, siendo ésta la primera vez en la historia de las Indias que las armas imperiales eran obligadas a ceder terreno parte del cual nunca más pudieron recuperar, puesto que fue sólo en 1883 que tropas chilenas finalmente se abrieron paso hasta las ruinas de Villarrica y procedieron a refundar la ciudad abandonada en la trágica retirada de 1599<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> La batalla de Rocroi, en 1643, es generalmente mencionada como el hito que marca el fin del imperio español, y no son pocos quienes consideran el monumento que se yergue sobre aquel campo de batalla como la tumba de la grandeza imperial de España. Aun cuando todavía no se ha erigido un monumento en Curalaba, esta decisiva derrota infligida por las huestes de Pelantaro puede con propiedad ser considerado el hito que marca el comienzo del fin de la expansión imperial española en las Indias.

La noticia del desastre de Curalaba causó consternación en la corte no sólo por la trágica muerte de alguien de tan elevada alcurnia como Óñez de Loyola, sino porque se temió por la seguridad eventual de Potosí, cuya inmensa producción argentífera sostenía gran parte de los gastos de la corona. Tal circunstancia llevó a la creación, en 1600, de un “Real Situado”, o subvención anual cubierta directamente con fondos del virreynato del Perú, para pagar los gastos del primer cuerpo regular de ejército de las Indias cuya creación, además de concluir de una vez por todas con el interminable conflicto, prometía facilitar la exención solicitada por los vecinos de Santiago. Incluso antes de Curalaba, una cédula real fechada el 15 de octubre de 1597 parecía indicar que la corona había accedido a los reclamos de los vecinos de Santiago al ordenar al gobernador que “... no los compeláis a ir a ella [la guerra] sino en casos forzosos...”, pero en realidad dejando las cosas como estaban puesto que su carácter discrecional la hacía aplicable sólo cuando a juicio del gobernador la situación militar lo permitiera, estipulación que dadas las circunstancias del momento efectivamente la cancelaba<sup>5</sup>.

Con tales antecedentes, no debe sorprender que cuando se creó el Real Situado, la principal recluta para servir en el nuevo ejército regular se hizo en Lima, Panamá y Sevilla pues se sabía que en Santiago fracasaría rotundamente. Así es como en 1602, más de medio siglo después de la fundación de Santiago, y cuando ya había segunda y tercera generaciones de criollos avecindados en la ciudad, ni un solo oficial y apenas siete por ciento de la tropa alistada en el ejército de la frontera de guerra habían nacido en Chile<sup>6</sup>.

La creación del ejército permanente acentuó el contraste entre el ámbito civil predominante en el norte, y la incipiente sociedad militar de la frontera sur. En Santiago y las regiones aledañas del Valle Central prosperó una sociedad de letrados, encomenderos, burócratas y sacerdotes, poseedores monopólicos del prestigio social, políticamente poderosos, dueños de la administración de los asuntos públicos, enfáticamente civiles y civilistas, cuyos intereses públicos y privados coincidían en asegurar el imperio de la

---

<sup>5</sup> Miguel Luis Amunátegui, *Los precursores de la Independencia de Chile* (Santiago, 1871), vol. II, p. 103.

<sup>6</sup> En 1602, la distribución de las tropas del ejército de acuerdo con su origen era la siguiente; españoles, 73%; criollos de las Indias españolas, 41%; chilenos, 7%; europeos no españoles, 3%; canarios, griegos y mallorquines, 2%; origen desconocido, 8%. Roberto Oñat y Carlos Roa, *Régimen legal del ejército en el Reino de Chile* (Santiago, 1953), pp. 138-142; asimismo, “Lista general de la gente de guerra que hay en este reino de Chile sacada de la muestra general que se tomó por el mes de diciembre de 1602”, *Colección de historiadores de Chile* 2, vol. VII, pp. 371-413.

ley robusteciendo visiblemente la venerable tradición española que definía al buen rey como aquel que provee “abundancia de justicia”, en este caso, una justicia necesariamente interpretada y administrada por jueces, notarios, oficiales mayores, oidores y letrados en general, cuya principalísima influencia no sufrió mayor atenuación durante el régimen imperial. Esta sociedad estaba constituida además en gran parte por residentes lo bastante satisfechos con el vecindario para pensar que su principal problema era precisamente evitar a toda costa el tener que abandonarlo.

Tales circunstancias formativas estaban distantes de la experiencia de la frontera del Sur donde tendió a consolidarse una sociedad estructurada funcionalmente alrededor de la autoridad del liderazgo militar de campaña y que, con la evidente excepción de los altos mandos militares y administrativos, estaba constituida principal y funcionalmente por gentes a disgusto que en verdad hubiesen preferido no estar allí. Era asimismo una sociedad predominantemente forastera, cuyos miembros, con pocas excepciones, habían sido reclutados entre los soldados cesantes, vagabundos y delincuentes de las ciudades de España y de Indias, o atraídos con la remisión de condenas en las galeras del rey, si no enganchados a la fuerza en los bajos fondos del Callao, Cartagena, Veracruz y Sevilla. No es difícil comprender que la disposición preeminente en tal sociedad estuviese tan alejada de leyes y de letras como la del vecindario santiaguino era letrada y legalista.

El contraste entre estas dos sociedades se reflejó en las relaciones entre sus miembros. Antes de Curalaba y del Real Situado, el tránsito de hombres armados hacia y desde la frontera de Arauco era parte normal del calendario estacional de la región entre Santiago y el Biobío, pero en aquel entonces se trataba de hijos de vecinos conocidos que rara vez cometían tropelías contra los hacendados españoles del lugar. Con la institución del ejército regular, este tránsito cambió fundamentalmente y las licencias para pasar a Santiago se transformaron en verdaderas autorizaciones para someter a los habitantes del Valle Central al pillaje, robos y violaciones habituales en los teatros de guerra europeos, exacerbados en este caso por la práctica particularmente cruel y cobarde de raptar indios de paz de cuyo trabajo dependía la agricultura de la región, para venderlos en Concepción como esclavos capturados en batalla. Pronto las depredaciones de la soldadesca fueron tales que la corona estimó necesario prohibir su paso hacia el Norte, dejando así a las dos sociedades efectivamente aisladas la una de la otra<sup>7</sup>. Este aislamiento social fue además reafirmado por la práctica de

---

<sup>7</sup> En 1610, la Real Audiencia se dirigió formalmente al entonces gobernador Alonso García Ramón para recordarle la existencia de disposiciones reales que prohibían la entrega de licencias a los soldados de la frontera para pasar a Santiago, y ordenó al corregidor de Maule, a



reembarcar a los soldados sobrevivientes a sus lugares de origen una vez cumplidos los períodos del enganche. Tales circunstancias contribuyeron a establecer una distancia quizás tan injusta como comprensible y excepcional en las Indias, entre un ámbito civil socialmente prestigioso y tradicionalmente asociado con el buen orden de los asuntos públicos y la obediencia a la ley, y uno militar, que aparecía como socialmente indeseable e inevitablemente asociado con un clima conflictivo de desorden y depredaciones. La prolongación intermitente de la guerra de Arauco aseguró que esta distancia apenas disminuyó durante los dos siglos que siguieron a Curalaba reteniendo vigencia suficiente para influir sobre el proceso de la independencia y el establecimiento eventual del régimen civil de gobierno republicano<sup>8</sup>.

Como es sabido, hasta bien entrado el siglo dieciocho, aparte de algunas guarniciones costeras y del ejército de la frontera de Arauco, no hubo fuerzas armadas regulares en las Indias españolas. Primero por decisiones políticas que respondían a las necesidades estratégicas del momento, reforzadas más adelante por ineptitud, indiferencia y penurias financieras, el imperio americano de los Habsburgo retuvo un estilo predominantemente civil y legalista que sólo fue modificado, y entonces marginalmente, durante las reformas recentralizadoras de la ilustración Carolina. La robusta intervención militar en los asuntos gubernamentales de los primeros años de vida independiente que más adelante caracterizó, si no caricaturizó, a los nuevos regímenes republicanos no fue, por consiguiente, una criatura de la tradición imperial española, sino que un vástago legítimo de la turbulencia populista napoleónica cuya aceptación generalizada en la Iberoamérica revolucionaria se debió, al menos en parte, a la promesa igualitaria del caudi-

---

mitad del camino entre Concepción y Santiago, que impidiera el tránsito a cualquier soldado que quisiera pasar hacia el Norte y arrestara a quienes se negaran a devolverse al Sur. Estas medidas fueron obviamente insuficientes pues la cédula del 18 de marzo de 1652 indica que en vista de “[...] los graves daños perpetrados por los soldados so pretexto de buscar provisiones frescas [...] así como robos y violencia [...] en la ruta (a Santiago) [...]” no se permitiría el otorgamiento de nuevas licencias para pasar a Santiago, cualesquiera las circunstancias. Oñat y Roa, *Régimen legal*, op. cit. p. 81.

<sup>8</sup> El desapego santiaguino por acudir a la frontera de guerra no se extendía a la parte ceremonial de la vida militar. En una sociedad en que virtualmente todos los civiles mayores de edad portaban armas, no es difícil comprender la popularidad de la milicia local, descendiente directa de aquella creada por Felipe II en 1590, en un intento algo ilusorio por levantar tropas adicionales para la lucha contra los protestantes ingleses y flamencos. Los mismos encomendados y burócratas que se oponían a cualquier intento por hacerlos servir en Arauco, se disputaban entusiasmados los puestos en la milicia, donde sus únicas responsabilidades eran de tipo ritual y ceremonial. Es sólo con las reformas recentralizadoras de los borbones, especialmente aquellas del reinado de Carlos III, que la carrera militar empieza a recobrar algo de su prestigio tradicional.

llo corso, muchos de cuyos mariscales habían encontrado bastones de mando al fondo de sus mochilas de campaña.

Con tales antecedentes, no es difícil imaginar la reserva con que terratenientes y letrados recibieron las ambiciosas, aun cuando frecuentemente ilustradas y bien intencionadas, reformas impuestas por gobiernos primerizos casi siempre encabezados por jefes militares de patriotismo imaculado, pero cuyos estilos y programas se apartaban del conservantismo legalista que durante dos siglos había presidido sobre la próspera sensatez del Valle Central. Tampoco debe extrañar la celeridad con que, luego de un breve período de desordenada experimentación y bien guiado por la opinión civilista a la cual, es justicia recordarlo, se plegaron destacados militares de la ciudad de Concepción como los generales Joaquín Prieto y Manuel Bulnes, el país dio la espalda a toda suerte de populismo militar y retornó al cauce principal de su probada tradición social y política. Los detalles de este proceso que tan visiblemente se apartó entonces de lo que ocurría en el resto de Iberoamérica, son demasiado conocidos para necesitar reiteración, pero vale la pena preguntarse, incluso a riesgo de incurrir en la falacia lógica de una hipótesis contraria a lo factual, si la consolidación de los regímenes civiles y la recuperación de prácticas de orden y probidad administrativas basadas en el imperio de la ley hubiese procedido tan eficazmente, incluso bajo el liderazgo del ministro Portales, en la ausencia de una tradición vigorosa de actitudes y hábitos de conducta asociados con los valores de una sociedad preeminentemente civil y letrada. Dicho de otro modo, podría argumentarse que el genio político de Portales se manifestó tanto en sus inspiradas innovaciones como en la perceptiva recuperación de una tradición eminentemente apta para afianzar la continuidad institucional que con tanta urgencia requería la república naciente. El éxito de esta política se reflejó decisivamente en una herencia que no se disipó con la trágica muerte del ministro, sino que estuvo legítimamente encarnada en los decenios conservadores de los presidentes Prieto, Bulnes y Montt, y que aun hoy día mantiene una especialísima vigencia que se manifiesta en todos los niveles. Por ejemplo, Chile debe ser uno de los pocos países del mundo en que los vendedores de diarios y revistas, no importa cuán alejados estén de los tribunales de justicia, dedican tan elevada proporción del escaso espacio de que disponen a la exhibición de textos de leyes que, voceados con el mismo entusiasmo con que se anuncian las últimas noticias de los tabloides populares, venden suficientes ejemplares para justificar esta atención preferente. Más decidora aún es la experiencia del gobierno militar encabezado por el Presidente Augusto Pinochet, quien seguramente hubiera preferido revocar mucho de lo realizado por el régimen de la Unidad Popular, especialmente

las expropiaciones llevadas adelante bajo la ley de reforma agraria, pero no pudo hacerlo puesto que parte importante de éstas fueron efectuadas de acuerdo con una ley que, cualesquiera sus defectos, había sido aprobada por el Congreso y no podía ser ignorada. Desde luego este acendrado legalismo es también responsable por la proliferación de prácticas burocráticas de meticulosidad inquietante y que continúan generando océanos de papel en los que no es raro que naufraguen incluso las más eficaces y benéficas decisiones políticas.

A partir de 1830 y prácticamente durante las mismas décadas de la república conservadora en Chile, la vida política allende los Andes se desenvolvió bajo el liderazgo de Juan Manuel de Rosas, que desde el punto de vista argentino seguramente se vio pleno de virtudes e imperfecciones inmensamente distantes de las que regían los asuntos públicos chilenos. En cuanto a la influencia formativa de la guerra de Arauco, se puede argumentar que en el caso argentino la sociedad colonial estuvo relativamente alejada de los asuntos bélicos pero cercana a procesos principales de la economía tales como la producción argentífera del Alto Perú, el flujo comercial a través del puerto de Buenos Aires, y la maciza prosperidad resultante de la irrupción de los productos de la pampa en los mercados mundiales. Estas consideraciones, sin duda incompletas, sugieren sin embargo que podría ser más fácil encontrar contrastes y divergencias que paralelos y simetrías en la historia de estas dos naciones. □